



AMLO consiente a la Sedena: le ofrece el mayor presupuesto de su historia

(Mathieu Tourliere, pág. 12-14)

Para contentar a la cúpula militar del país, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no sólo desplegó esfuerzos diplomáticos inéditos y gastó capital político para sustraer al general Salvador Cienfuegos Zepeda de la justicia de Estados Unidos y traerlo a México como hombre libre; también otorgó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el presupuesto más elevado de su historia: dispondrá de 112 mil 557 millones de pesos el próximo año, 18 mil 528 millones de pesos más que en 2020

En el presupuesto de egresos de 2021, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP) y aprobado por la mayoría de los legisladores de Morena, se plantea que la dependencia a cargo de Luis Cresencio Sandoval González operará el próximo año con 31 mil millones de pesos adicionales a los que disponía Cienfuegos al frente de la Sedena en 2018, último año del gobierno de Enrique Peña Nieto.

En su tercer año en el poder, López Obrador intensificó la militarización del país lanzada por su antecesor Felipe Calderón Hinojosa en la llamada “guerra contra el narcotráfico”, y continuada por Peña Nieto. Así, en 2021 la Sedena tendrá cerca de tres veces más recursos que en 2010, cuando la administración de Calderón le destinó 43 mil 632 millones de pesos

En un contexto de austeridad y de crisis económica, el gobierno de López Obrador ofreció a la Sedena el mayor incremento presupuestario de la administración pública federal, superior incluso a los 16 mil 588 millones de pesos extras contemplados en el presupuesto de la Secretaría de Salud para 2021, año en que se-guirá enfrentando una presión inédita por la pandemia de covid-19.

Aparte, este año la Sedena ya asumió el control operativo de la Guardia Nacional, una institución con cerca de 100 mil agentes uniformados, armados y desplegados en el territorio nacional para realizar labores de seguridad pública, a la que el gobierno federal dotará de 35 mil 671 millones de pesos en 2021 –6 mil 385 millones de pesos más que los recursos que dicha institución compartía con la Policía Federal este año—. En septiembre pasado, López Obrador expresó su deseo de que la GN cuente con 248 cuarteles a finales de 2021; en esa fecha, 79 de esos recintos ya existían.

Palacio Nacional también aumentó el presupuesto destinado a la Secretaría de Marina (Semar), aunque de manera más moderada: de 33 mil 557 millones de pesos en 2020 pasará a 35 mil 476 millones de pesos el año entrante.



Así, a través de los montos otorgados a la Sedena, la GN y la Semar, el gobierno federal destinará 183 mil 704 millones de pesos a su aparato militar el próximo año, un monto similar al que tiene previsto para los programas sociales que repartirá la Secretaría de Bienestar.

Respaldo presidencial

Estas cifras reflejan el espacio cada vez más importante y central que la llamada Cuarta Transformación otorga al Ejército en su proyecto de nación: legalizó su acción de seguridad pública, le encargó la política migratoria, le entregó los puertos y las aduanas y, por si fuera poco, le adjudica contratos multimillonarios de obra pública, como el aeropuerto de Santa Lucía, la construcción de las sucursales de los bancos de Bienestar o los dos tramos más grandes del Tren Maya.

De acuerdo con una revisión en la plataforma Compranet, entre 2019 y lo que va de 2020 el propio gobierno federal otorgó por lo menos 50 contratos a la Sedena – mediante adjudicación directa– por un monto total superior a los 2 mil 481 millones de pesos.

La operación diplomática y política sin precedente que realizó el gobierno de López Obrador –a través del canciller Marcelo Ebrard Casaubón– para que la administración de Donald Trump desechara los cargos de narcotráfico y lavado de dinero contra Cienfuegos se llevó a cabo en el marco de una relación más fuerte que nunca entre el gobierno civil y la cúpula militar.

En su conferencia matutina del pasado miércoles 18, López Obrador evocó la importancia de la Sedena cuando justificó la respuesta vigorosa de su gobierno para traer a Cienfuegos a México: afirmó que “aquí, además, está de por medio el prestigio de una institución fundamental para el Estado mexicano, que es la Secretaría de la Defensa, las Fuerzas Armadas”.

“No es cualquier cosa, no podemos nosotros permitir, sin elementos, que se socaven nuestras instituciones fundamentales; además, México es un país, que no se olvide, libre, independiente, soberano”, abundó el mandatario, en un franco respaldo al militar acusado por las agencias estadounidenses de trabajar de la mano con una célula de la organización criminal de los Beltrán Leyva en Nayarit.

Desde el anuncio sorpresivo del abandono de los cargos contra Cienfuegos, la prensa reportó que López Obrador elevó la voz ante Washington para atender la reacción furibunda y a las presiones que la cúpula militar ejerció sobre el gobierno mexicano después de la captura de su exjefe, el pasado 15 de octubre.



A la par, el mandatario ofreció a la Sedena su mayor presupuesto en la historia. La mayor parte del gasto adicional a la institución militar para 2021 se explica por los 29 mil 725 millones de pesos destinados a la Dirección General de Ingenieros – que construye, entre otros, el Aeropuerto de Santa Lucía–; sin embargo, el gobierno federal también le entregará 3 mil 878 millones de pesos adicionales para pagar los salarios de los soldados, lo que llevará el presupuesto de “servicios personales” a un total de 65 mil 159 millones de pesos.

En comparación con 2020, la administración de López Obrador autorizó 953 millones de pesos adicionales a la Comandancia de la I Región Militar, 827 millones de pesos más a la Dirección General de Administración; 703 millones extras a la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional, y 414 millones más a la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana.

Prioridades

Aparte de las dependencias castrenses, muy pocas instituciones tendrán incrementos presupuestarios el próximo año, y menos para sus gastos de nómina.

El Instituto Nacional de Migración (INM), que junto con la Guardia Nacional se dedica a impedir el paso a las personas que huyen de Centroamérica para que no lleguen a Estados Unidos –conforme a un acuerdo que los gobiernos de López Obrador y Trump pactaron en el verano de 2019–, es uno de estos escasos casos: tendrá mil 603 millones de pesos, contra mil 487 millones de pesos este año; en paralelo, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados quedará con un presupuesto irrisorio de 40 millones de pesos, 7 millones menos que en 2020.

Otra dependencia que escapará a la austeridad republicana será la Secretaría de Bienestar, y más particularmente la Unidad de Coordinación de Delegaciones, que tiene en su nómina a los 32 llamados “superdelegados”, los más de 250 “subdelegados” y los más de 18 mil “Servidores de la Nación” que operan los programas sociales en el país bajo las instrucciones de Gabriel García Hernández, un operador incondicional de López Obrador (Proceso 2298).

Así, para 2021 –año electoral– dicha unidad tendrá 4 mil 75 millones de pesos; es decir, 842 millones más que en 2020, o un incremento presupuestario de 26%. El gobierno federal también prevé incrementar los recursos que repartirá mediante algunos de sus programas sociales –otorgó 8 mil millones de pesos más a las Becas para el Bienestar Benito Juárez, 8 mil millones de pesos adicionales a los programas dispersados por la Secretaría de Bienestar, y 6 mil millones más al Programa de Infraestructura, por ejemplo–, pero recortará otros, como Jóvenes Construyendo el Futuro, que tendrá 5 mil millones de pesos menos.



El Tren Maya, uno de los megaproyectos de mayor importancia para López Obrador, también escapará a la política de austeridad, pues la SHCP otorgará cerca de 38 mil millones de pesos al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur); sin embargo, se espera que la Sedena sea el principal contratista de la dependencia para construir el Tren Maya, pues realizará los dos tramos más amplios de la obra, en plena selva.

Las demás dependencias tendrán presupuestos similares a los de este año –ya marcados por la austeridad– y algunas incluso sufrirán nuevos recortes: la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) operará con 600 millones de pesos menos que en 2020 –aunque la oficina de Ebrard tendrá 4 millones de pesos más–, o la Secretaría de Energía (Sener) tendrá 200 millones de pesos menos para su gasto corriente, por ejemplo.

Con Estados Unidos "se perdió la confianza" y "ya nada será igual"

(J. Jesús Esquivel, pág. 6-10)

Ante la pérdida de confianza con Estados Unidos en la cooperación sobre seguridad y combate al narcotráfico por el caso del general Salvador Cienfuegos, se restringirá el marco de operación en México de la DEA, el FBI, la CIA, el ICE y otras agencias estadounidenses, aseguran funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El hecho de que el Departamento de Justicia estadounidense no compartiera con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que el exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena) era objeto de investigación bajo la Operación Padrino, abrió un tajo en la relación bilateral.

“Tras el arresto del general Cienfuegos en el aeropuerto de Los Ángeles y de que transmitimos nuestra posición, el procurador general de Justicia, William Barr, propuso ir a México para tener una reunión, pero dijimos que no era el momento”, cuenta a Proceso una de las fuentes.

Por tratarse de un “tema delicado”, el funcionario pide no revelar su identidad y bajo ese acuerdo agrega: “Barr no esperaba una negativa a su propuesta de viajar a la Ciudad de México”.

La molestia del gobierno de AMLO por el arresto de Cienfuegos en California el pasado 15 de octubre, acusado por la DEA de narcotráfico y lavado de dinero, se transmitió a Barr al día siguiente de la captura.



“Barr habló de ir a México acompañado del administrador (interino) de la DEA, Timothy Shea, y la contestación del gobierno del presidente López Obrador fue que se esperaran hasta que concluyeran sus elecciones presidenciales (del 3 de noviembre)”, agrega el funcionario.

El triunfo de Joe Biden sobre el presidente Donald Trump enterró la petición Barr sobre viajar para reunirse con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Nueva cooperación

El secretismo con que la DEA y el Departamento de Justicia manejaron la Operación Padrino provocó una incisión en la cooperación bilateral en seguridad y combate al narcotráfico. Tras la detención y encausamiento de Cienfuegos, el presidente López Obrador decidió someter a revisión la cooperación con la DEA y otras agencias estadounidenses, tal como lo publicó Proceso en su edición 2295 del pasado 25 de octubre.

“Ya no será nada igual”, sentencia otro alto funcionario del círculo de asesores del presidente López Obrador, quien al igual que su colega fue autorizado para hablar con este semanario con la condición de que no se le citara por nombre ni puesto en el gobierno.

“La renuncia a procesar en Nueva York al general Cienfuegos casi fue inmediata cuando le informamos al Departamento de Justicia que cambiaría la relación con la DEA y con todas las otras agencias de inteligencia y de seguridad que trabajan en México”, subraya la fuente.

Cuando matar o morir es algo "normal" en un infante

(Gloria Leticia Díaz, pág. 28-30)

Ricardo es un joven de 20 años que lleva más de dos años interno y le quedan otros tres para cumplir con su sentencia. Su padre era secuestrador y lo mataron cuando él tenía cinco años. Su madre es ama de casa, tiene cinco hermanos y él fue el sexto en su familia. Desde los 14 años salió de su casa por la violencia que había en su familia y se fue a vivir a casa de una de sus hermanas.

Ricardo estudió hasta el primer año de secundaria y abandonó la escuela porque lo corrieron, pues vendía drogas a sus compañeros. Desde los 13 años se dedicaba a vender drogas y del dinero que obtenía una parte le daba a su familia (...) De entre sus familiares, tanto su papá como alguno de sus hermanos, tíos y primos han estado alguna vez en prisión.

(...) Ricardo se encuentra acusado por homicidio, robo con violencia y lesiones. Él relata lo siguiente:



“yo formaba parte de un grupo, como un cártel; había otros señores más grandes que nos decían qué hacer, yo los conocía desde que era chavo, desde que tenía 12 años, en ese entonces yo compré un arma y maté a alguien. Era un grupo que vendía drogas, armas y nos ponían a empresarios o a diputados para que los secuestráramos o los matáramos. Matábamos porque había agravios contra esas personas, porque eran de otros grupos; a mí también me tocaba matar. Era normal, era parte de mi vida (...) no sabría decirle a cuántos maté, pero fueron más de 10. De todas las personas que pertenecían a ese grupo, que eran como 40, solo dos eran menores de edad. El jefe de ese grupo había pertenecido a la Marina” (...) Al preguntarle si cuando salga piensa regresar con ese grupo, responde que piensa irse a otro estado de la República para no tener que regresar con el grupo, y cuando le pregunto qué quisiera hacer en el futuro, responde: “dejar esta vida y tener una familia”.

Testimonios de la infamia

La historia de Ricardo forma parte de 730 testimonios de adolescentes en conflicto con la ley privados de libertad en 17 estados, que la investigadora Elena Azaola Garrido reúne en su libro Nuestros niños sicarios (Fontamara, 2020).

Antropóloga social del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) con una trayectoria de 40 años, en los que ha abordado entre sus temas de investigación la situación de niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, Azaola Garrido resalta que persiste la falta de visión de largo plazo en gobiernos y ciudadanía, para apoyar a niños, niñas y adolescentes, y alejarlos del reclutamiento que realizan grupos criminales en el país.

Investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores (SIN), “dispuesta a colaborar” con sus conocimientos en el diseño de políticas públicas en favor de la infancia y adolescencia, Azaola advierte que el reclutamiento de menores de 18 años por parte del crimen organizado es “multifactorial”, lo que pudo evidenciar a través del estudio condensado en su libro.

Al pedirle una reflexión sobre tragedias como las que se han visto involucrados niñas, niños y adolescentes en las últimas semanas, particularmente en la Ciudad de México Azaola Responde: “Sí hay un horror, sí hay un escalamiento de violencia; y es un escalamiento –con todas las comillas– ‘normal’ dentro de lo que es el abandono de una zona y el abandono de políticas dirigidas a la primera infancia.



“Si estos niños vivieron desde pequeños en ciertas circunstancias que los coloca en riesgo, si eso no se atendió de manera oportuna y está en un contexto de crecimiento de fortalecimiento del crimen organizado, todo esto es ‘normal’ –otra vez con todas las comillas–, ¡claro que no es normal!, pero es el desenlace esperado de la película si te la transmiten durante años”.